



Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#). [Advertencia.](#)

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material

La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:



Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.



NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con [propósitos comerciales](#).

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

La vulneración del Principio de Transparencia en los Procesos de Selección de la Contratación Estatal¹

The violation of the Principle of Transparency in the Selection Processes of State Contracting

Manuela Vargas Oliveros*
Universidad Católica de Colombia

Resumen

En razón a la gran importancia que posee la contratación estatal, como aquel mecanismo indispensable para la consecución de los fines del estado, es imprescindible dar respuesta al siguiente planteamiento: ¿Cuáles son las posibles vulneraciones que se llevan a cabo por parte de las Entidades del Estado, cuando omiten aplicar el principio de transparencia para los procesos de contratación estatal? Lo anterior, llevando a cabo una metodología investigativa cualitativa, a través de la cual fue posible realizar la revisión de doctrina, sentencias y leyes para indagar profunda y exhaustivamente, y así, recopilar toda la información pertinente, a fin de obtener la comprensión del fenómeno, y lograr ofrecer diversas respuestas o soluciones a la realidad social a fin de mitigar el impacto en la contratación.

Así mismo, se tomó como punto de referencia toda la normatividad vigente reguladora del tema, se realizó el análisis conceptual y se propusieron las soluciones jurídicas más viables.

A su vez, se empleó el método analítico, en virtud del cual se identificó principalmente el problema a resolver, y posteriormente se estipularon los elementos esenciales del presente estudio, siendo examinados de manera desagregada para efectivizar su comprensión total. De esta manera, se precisaron los siguientes objetivos: I. Identificar la naturaleza jurídica del principio de transparencia en los contratos estatales; II. Establecer las vulneraciones

¹ Artículo resultado de investigación para optar por el Título de Abogada de la Universidad Católica de Colombia. Correo Institucional: mvargas74@ucatolica.edu.co. Directora de trabajo de grado: Dra. Ruth Carolina Blanco Alvarado. Correo Institucional: rcblanco@ucatolica.edu.co.

ocasionadas por el desconocimiento de dicho pilar, y finalmente, III. Determinar las causas y posibles soluciones a la problemática.

Ahora bien, del análisis precitado se obtuvo como resultado la clara transgresión a la objetividad, neutralidad e igualdad, entendiendo estos como aspectos inherentes al principio referido. Así como también, la integridad que se supone debe llevar a cabo la administración para todas sus actuaciones. Motivo por el cual, es preciso creer que el desconocimiento de dicho principio, conlleva inmediatamente a la corrupción en los procesos de selección realizados por las Entidades del orden nacional, de tal manera que el interés general escala a un segundo plano, sobreponiéndose el particular, situación que vulnera la obligación de que todos los participantes, cuenten con las mismas oportunidades en los procedimientos de escogencia.

Palabras Clave: Aplicación; Estado; Igualdad; Interés; Modalidades; Selección; Principio de Transparencia.

Abstract

Due to the great importance of state contracting, as that indispensable mechanism for the achievement of state purposes, it is essential to respond to the following question: What are the possible violations that are carried out by the Entities of the State? State, when do you fail to apply the principle of transparency for state contracting processes? The above, carrying out a qualitative investigative methodology, through which it was possible to carry out a review of doctrine, sentences and laws to investigate deeply and exhaustively, and thus, collect all the pertinent information, in order to obtain an understanding of the phenomenon. , and manage to offer various responses or solutions to social reality in order to mitigate the impact on hiring.

Likewise, all the current regulations on the subject were taken as a point of reference, the conceptual analysis was carried out and the most viable legal solutions were proposed.

At the same time, the analytical method was used, by virtue of which the problem to be solved was mainly identified, and later the essential elements of this study were stipulated, being examined in a disaggregated way to make their total understanding effective. In this

way, the following objectives were specified: I. Identify the legal nature of the principle of transparency in state contracts; II. Establish the violations caused by ignorance of said pillar, and finally, III. Determine the causes and possible solutions to the problem.

Now, the aforementioned analysis resulted in a clear violation of objectivity, neutrality and equality, understanding these as inherent aspects of the aforementioned principle. As well as, the integrity that the administration is supposed to carry out for all its actions. Reason why, it is necessary to believe that the ignorance of said principle immediately leads to corruption in the selection processes carried out by the Entities of the national order, in such a way that the general interest escalates to the background, superimposing the particular, A situation that violates the obligation that all participants have the same opportunities in the selection procedures.

Keywords: Application; State; Equality; Interest; Modalities; Selection; Principle of Transparency.

Sumario

Introducción. 1. Naturaleza jurídica del principio de transparencia en los contratos estatales. 1.1. Definición 1.2. Función del principio de transparencia 1.3. El SECOP como instrumento principal para efectivizar el principio de transparencia en los contratos estatales 1.4 Criterios comprendidos en el principio de transparencia 1.5. Fundamento legal 2. Causales de vulneración al principio de transparencia en los contratos estatales. 3. Propuestas de solución frente a la posible vulneración del principio de transparencia en los contratos estatales por entidades del orden nacional. 4. Conclusiones. Referencias.

Introducción

La propuesta de investigación, tiene como finalidad establecer el enorme interés que representa para la sociedad y el Estado, la inaplicabilidad del principio de transparencia en los procesos de contratación estatal. Si bien es cierto que existe alguna normatividad para la regulación del asunto en referencia, como lo es la Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública (s, 2018), y se estipula en el artículo 3 que la contratación estatal está dirigida única y exclusivamente a brindar la prestación de los servicios públicos de una manera continua y eficiente; también es fundamental que las Entidades incluyan a los “administrados” para la consecución de dichos propósitos, y les brinden igualdad de oportunidades, siempre y cuando éstos, den efectivo cumplimiento a los parámetros establecidos que se requieren para hacer parte de tan importante contribución.

En consonancia con lo antedicho, el presente artículo expone concretamente la problemática por la cual atraviesa el país, en relación con los procesos de selección de los contratos estatales por las Entidades del orden nacional. Cabe mencionar que el principio de transparencia (en el cual se hará énfasis) lleva consigo diferentes aspectos que lo componen, y que de ser desconocidos, de manera inmediata conducen a una corrupción de la cual se hace acreedora la administración, quien es la encargada de brindar garantías al momento de escoger a los contratistas del Estado.

Una vez se aborde por completo el asunto en referencia, será posible dar a conocer las causas de las mencionadas infracciones, y posteriormente se brindarán determinadas soluciones que podrían proporcionar un aporte concreto, que servirá como herramienta para que los ciudadanos exijan el cumplimiento de la debida ejecución de la contratación pública, y el Estado por su parte, intervenga adoptando las disposiciones necesarias para dar fin a esta situación.

1. Naturaleza jurídica del principio de transparencia en los contratos estatales.

1.1 DEFINICIÓN

En primera medida, resulta esencial establecer que los principios, tal como lo ha definido el filósofo Robert Alexy, hacen referencia a las normas que imponen que se realice alguna cosa en la medida de lo posible. Es decir, son mandatos de optimización, que pueden ser satisfechos en mayor o menor grado, según la importancia que el intérprete les atribuye con respecto a un principio concurrente.

A su vez, el filósofo Ronald Dworkin, mediante su artículo llamado “¿Es el Derecho un sistema de reglas?”, establece que los principios pueden ser o no aplicados dependiendo de los criterios de razonabilidad de cada persona; por tanto, el intérprete hará uso del principio que considere moralmente más fuerte y con mayor valencia. Igualmente, precisa que la aplicación de los mismos, responde a un Derecho justo, puesto que son morales, buenos y equitativos; sin embargo, no son exigidos a diferencia de las reglas.

Por su parte, Transparencia por Colombia a través del artículo “Una mirada a la transparencia en la gestión pública”, precisó que la misma se resume en el marco jurídico, ético y político que debe regir todas las actuaciones de los servidores públicos en Colombia, pues supone documentar todas las gestiones del estado, para que de esta forma, la ciudadanía tenga la posibilidad de acceder a esta información, enterándose de los procesos y resultados de la gestión. Específicamente se trata del acto de permitir que el mensaje que se está proporcionando, sea lo más claro y verídico posible.

Ahora bien, si se unen los dos conceptos mencionados, y en consonancia con la celebración de los contratos estatales, se encuentra como resultado que el accionar de la administración, debe ser público en virtud de dicho pilar; lo que quiere decir, que para ser efectivo, debe estar “a la vista de todos”. (Zak, s,f).

En concordancia con esta base, el Consejo de Estado en Sentencia **17767 de 2011** precisó que: “Es en desarrollo del principio de transparencia que se impone la obligación de realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa sin

tener en consideración favores o factores de afecto o de interés" Lo anterior, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios de igualdad e imparcialidad.

Así las cosas, el principio de transparencia se entiende como aquel mandato que implica que el actuar de la administración se realice de manera adecuada, lo cual conlleva imparcialidad en la escogencia del contratista, igualdad de oportunidades para todos los oferentes, y objetividad durante todo el proceso. En virtud de dicho pilar, se busca atacar la corrupción y garantizar la moralidad de la contratación. En resumen, el principio de transparencia, atiende al respeto de las reglas preestablecidas para cada procedimiento contractual. (Herrera, 2014).

1.2 FUNCIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

El principio objeto de ésta investigación, hace parte de uno de los requisitos que debe llevar consigo cada proceso de selección con el Estado, pues aparte de permitir el desarrollo de los mecanismos publicitarios a través de los cuales se transmite la información a la comunidad sobre cada una de las etapas de los contratos en referencia, configura una de las políticas de lucha contra la corrupción. (Millán, 2018).

Dicho esto, es posible aludir que este pilar busca la objetividad en todos los procesos de contratación, pues para llegar a un buen resultado en las fases de selección, es indispensable la aplicación de los diversos principios que reglamentan el asunto de la escogencia (Millán, 2018). De acuerdo con lo anterior, Colombia Compra Eficiente (consultada en el mes de enero del año 2021), se pronunció al respecto, señalando aspectos esenciales, que involucran concretamente principios que están enlazados entre sí; teniendo en cuenta esto, es preciso señalar que el tema puntual del cual se profundiza en el presente escrito, es el principio de transparencia en los procesos de contratación estatal de las entidades del orden nacional; sin embargo, para abordar la totalidad del mismo, es fundamental establecer que la efectividad de éste, se materializa al momento de cumplir los requisitos inmersos en otros pilares, como lo es la publicación de la información relacionada con los

procesos, lo que se refiere de manera específica al principio de publicidad que se encuentra íntimamente ligado al de transparencia; de esta forma, se someten los procedimientos al control social (Bautista, 2017).

Para continuar, es indispensable precisar que la contratación estatal es la herramienta que permite la realización de los propósitos del estado, en lo que se refiere a la ejecución de los procedimientos necesarios para la continua y eficiente prestación de los servicios públicos. Lo anterior, en concordancia con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 por medio la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Así las cosas, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de dichos objetivos, dando total cumplimiento a los lineamientos establecidos para llevar a cabo los procesos de selección. Dicho de otra manera, la celebración de los contratos en referencia, obedece a la importancia de satisfacer todos los requerimientos colectivos, para la materialización de los derechos estipulados en la Constitución (Jara, 2018).

Así pues, la importancia de los procedimientos precitados, radica primeramente en la manera que se ponen en práctica, pues además de estar diseñados para atender las necesidades de la sociedad en cuanto a servicios, llevan consigo inmersa la posibilidad de que todos los interesados hagan parte de los proyectos plasmados en los contratos, y tengan conocimiento de la información certera correspondiente a cada proceso, sea cual sea la modalidad de selección; lo que quiere decir que este pilar, está dirigido a favorecer ciertamente las necesidades de toda la colectividad, y por tanto, sirve cuando se lleva a cabo de manera adecuada y teniendo como propósito y enfoque único, la realización de los propósitos referidos; además de prevenir y controlar los riesgos de corrupción tal y como lo señala Transparencia por Colombia en su artículo “Una mirada a la transparencia en la gestión pública”, pues mediante este principio se lleva a cabo igualmente la debida gestión de los asuntos y bienes públicos, favoreciendo la integridad y la exigibilidad de rendir cuentas (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción).

Dicho lo anterior, y con el objeto de contextualizar, es preciso aludir que en cuanto a los diversos métodos de escogencia, la ley ha señalado principalmente la licitación pública, la cual se usa por las Entidades, para que todas las personas interesadas en

llevar a cabo un contrato, presenten sus ofertas; el proceso se inicia con una convocatoria pública, en la que todos los participantes deben contar con igualdad de oportunidades, y dar cumplimiento a los criterios plasmados en el pliego de condiciones para poder postularse, y así, escoger a la persona más idónea. (Jiménez, 2016).

Por su parte, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, concreta puntualmente el asunto de la escogencia del contratista y, además, establece que la licitación pública, es aquel proceso mediante el cual las entidades realizan una invitación para que las personas interesadas en suscribir un contrato, presenten sus ofertas.

En cuanto al concurso de méritos, puntualiza que es otra modalidad, a través de la cual, se escoge a quienes posean mayor experiencia. En resumen, es la manera por la que se seleccionan los contratistas que tengan mayor capacidad técnica o la que se requiera para el fin del contrato.

Por su parte, la selección abreviada, que corresponde a la tercera modalidad, se usa para los casos en que se adelantan procesos según el objeto a contratar, la cuantía o destinación del bien, obra o servicio. Según el Régimen precitado, la selección abreviada responde básicamente al trámite que permite un proceso simplificado, debido a las características del objeto a contratar.

En relación con la contratación directa, la ley estipula que es una modalidad de carácter excepcional, pues únicamente es procedente en ciertos casos, por ejemplo, cuando se trate de urgencia manifiesta, cuando no haya abundancia de oferentes, cuando se vayan a celebrar contratos interadministrativos, entre otros. (Régimen contractual en Colombia, s.f).

Finalmente en cuanto a la mínima cuantía, Colombia Compra Eficiente, determina que se trata del procedimiento utilizado para elegir a los contratistas, cuando los bienes, obras y servicios, no exceden el 10% de la menor cuantía de las Entidades del Estado.

Así pues, la importancia de la recopilación de la información suministrada en líneas anteriores, radica en la característica en común que contienen todas las modalidades, y se traduce en la necesidad que conlleva ejecutar de forma transparente

todos los procedimientos referidos, pues no sirve de nada celebrar dichos contratos, si no se llevan a cabo los parámetros que ha estipulado la normatividad para ello.

Por último, es viable además, puntualizar que el principio de transparencia tiene como objeto garantizar el total desarrollo de los principios, lo cual implica que esta actividad contractual se realice teniendo en cuenta la moralidad pública. (Herrera, 2014). Adicional a ello, en virtud de este pilar, se busca que la administración sea clara y precisa con toda la información que contenga la licitación o el proceso que se vaya a realizar bajo cualquiera de las modalidades previstas para la contratación estatal y sobre todo, que las comunicaciones sean completas y verídicas. Asimismo, se deben definir las reglas de la manera más exacta, para evitar que los oferentes tengan confusiones y por último, en cuanto a los actos administrativos que se expidan durante los procesos, es indispensable que se motiven de forma detallada y específica. (Montes, s.f).

Al respecto, el Consejo de Estado se pronunció en **Sentencia 17767 de 2011**, manifestando que “Con el objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento de requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la suscripción del contrato debe estar precedida, de acuerdo con la letra del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o concurso público y, excepcionalmente, de un proceso de contratación directa (...)”.

1.3 EL SECOP COMO INSTRUMENTO PRINCIPAL PARA EFECTIVIZAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LOS CONTRATOS ESTATALES

En consonancia con dicho principio fundamental, la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley [80](#) de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos, creó una plataforma llamada SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), con el objetivo de que allí, las entidades plasmaran los documentos correspondientes a los procesos de selección, como lo son: el aviso de la convocatoria

pública, el proyecto del pliego de condiciones, las observaciones que presentan los oferentes, el acto administrativo que decreta la apertura del proceso de selección, el pliego de condiciones definitivo, la constancia de envío de información de la licitación pública a la Cámara de Comercio, el acta de la audiencia de aclaración, el acta de la audiencia de revisión de riesgos previsibles, el acta de suspensión del proceso, los informes correspondientes a la evaluación de las propuestas y la verificación de requisitos habilitantes para el acceso al proceso, el acto de adjudicación del contrato, el contrato con las adiciones y modificaciones que se le realicen, entre otros. (Régimen Contractual en Colombia, s.f).

En concreto, toda la información con respecto a cada proceso específico, según la ley, se debe incluir en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, a través de esta plataforma, se deben dar todas las indicaciones a las que haya lugar y se deben plasmar las sugerencias que presenten los oferentes, esto, de conformidad con el principio de transparencia, en virtud del cual se revelan con absoluta nitidez los datos concernientes a cada trámite.

Mediante el SECOP II, los usuarios tienen la posibilidad de verificar todo el asunto concerniente a los proveedores y compradores, quienes realizan la contratación en línea, y así mismo, de corroborar la adjudicación de los procesos. (Colombia Compra Eficiente, s.f). Concretamente, consiste en el punto único de información, que da cumplimiento de manera específica al principio de publicidad del que se habló en líneas anteriores, y el cual se encuentra de alguna manera inmerso en el de transparencia.

1.4 CRITERIOS COMPRENDIDOS EN EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

El principio de transparencia, lleva consigo diversos criterios como lo son: (i) la igualdad de condiciones para todas las personas que se encuentren interesadas en la propuesta, (ii) la objetividad para escoger al oferente, (iii) la neutralidad, (iv) la garantía del derecho de contradicción, (v) la publicidad de las actuaciones llevadas a cabo por la administración y (vi) la motivación expresa del acto de adjudicación. (Herrera, 2014).

Teniendo en cuenta que el pilar en estudio aborda aspectos tan importantes como los mencionados, vale la pena establecer que todos estos tienen como fin impedir el abuso del poder por parte de las autoridades; al respecto, la honorable Corte Constitucional en **Sentencia C – 508/02**, enunció justamente que con el objetivo de asegurar la imparcialidad, los procedimientos utilizados por las entidades deben ser claros, nítidos y transparentes, en favor de consolidar la prevalencia del interés general como base esencial del estado social de derecho.

Así las cosas, es fundamental que la administración, desde el principio de cada trámite, establezca los requisitos para la contratación, y que durante la ejecución del mismo se actúe con total integridad y rectitud.

1.5 FUNDAMENTO LEGAL

Dicho pilar como lo expresó el Dr. Pablo Zak (s.f), derivó de nuestra Carta Política, como lo ha estipulado la doctrina, ósea, del sistema democrático de gobierno.

Ahora bien, así como se ha mencionado a lo largo del presente estudio, el principio de transparencia se encuentra debidamente regulado por diversas normas:

Primeramente, encontramos que el artículo 24 de la ley 80 de 1993 por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, establece que en virtud del principio de transparencia, toda las actuaciones deberán ser públicas, de esta manera, quienes estén interesados en los procesos de contratación, tendrán la posibilidad de conocer y controvertir las decisiones que se tomen respecto a cada procedimiento. Así mismo, y en consonancia con este artículo, resulta indispensable que la administración suministre la información que sea necesaria para dar claridad del proceso que se lleva a cabo; por tanto, deberá estipular las reglas de forma objetiva, justa, clara y completa, y a su vez, los costos y demás elementos que eviten confusiones e inducciones de error a los posibles oferentes.

En resumen, el artículo en mención, alude a la importancia de que las autoridades ejerzan sus competencias única y exclusivamente para los fines que estipula la ley.

Por su parte, el artículo 209 de la Carta Política estipula que igualmente que la función de la administración debe perseguir la prestación de los intereses de la

sociedad y por tanto, debe realizarse teniendo en cuenta los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Finalmente, el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 (Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones), señala que, conforme a este principio, la administración se encuentra en el deber de proporcionar el acceso a la información que se desprende de cada procedimiento.

2. Causales de vulneración al principio de transparencia en los contratos estatales.

1. Una de las causas principales de la transgresión al principio de transparencia en los contratos estatales, es concretamente el fraccionamiento contractual, pues es de resaltar, que la licitación pública, constituye uno de los requisitos fundamentales de la contratación, y la omisión de uso de esta, configura el delito de celebración indebida de contratos.

Al respecto, es posible establecer que el fraccionamiento hace alusión al hecho de dividir algo en varias partes. Así las cosas, para este caso, encontramos que los contratos son partidos, para omitir el ordenamiento en cuanto al cumplimiento de los requisitos de selección. Dicha segmentación, excluye indiscutiblemente la regla general de licitación pública, para así, satisfacer intereses netamente particulares. (Araujo,2017).

Para Warner Cascante Salas la prohibición de fraccionamiento se conceptualiza como aquel vicio administrativo que consiste en fraccionar operaciones respecto de necesidades previsibles, con el propósito de evadir los procedimientos normales u ordinarios de contratación administrativa. El fraccionamiento se tiene como ilícito cuando, contándose con los recursos necesarios debidamente presupuestados o financiados y conociéndose la necesidad administrativa concreta o el suministro necesario que se pretende obtener, se realiza más de una contratación para el mismo objeto. (Tacuri, s.f).

Escoger a un contratista como se ha mencionado en líneas anteriores, implica un proceso que puede variar dependiendo de las características del bien o del servicio, y, de

cualquier manera, la administración se encuentra en la obligación de obedecer a este mandato legal y de usar de manera EXCEPCIONAL la contratación directa.

Ahora bien, siendo el fraccionamiento de contratos, un asunto que el legislador dejó por fuera tanto en el Código Penal Colombiano, como en la Ley de Contratación Pública, los órganos judiciales y las altas cortes, realizaron un análisis estudiando los principios que rigen la contratación estatal, y del mismo, fue posible determinar que visto desde el principio de transparencia, la división de lo que debiera ser un solo contrato en varios, constituye una conducta desviada, puesto que como lo contempla el artículo 24 de la Ley de Contratación Pública, todos los actos de la administración deben ser llevados a cabo bajo este imperativo, y por tanto, el fraccionamiento quebranta tal mandato, pues es considerado como una herramienta de evasión de la Licitación Pública como método de escogencia del contratista, para optar por la Contratación Directa a voluntad del funcionario (Araujo, 2017).

2. Colombia ha sido un país que se ha caracterizado por tener innumerables situaciones de corrupción en diversos escenarios; así las cosas, y para esclarecer el significado de la palabra, resulta pertinente mencionar el concepto de Transparencia por Colombia, en la que ésta se define como aquel abuso de posiciones de poder para el beneficio particular. Por tanto, la segunda causa de esta problemática, es básicamente el favorecimiento de intereses particulares.

En un escenario en el que se manejan grandes cantidades de dinero provenientes del erario, en el que prima la discrecionalidad y la subjetividad de unos individuos investidos por un cargo público y/o político corruptible, en el que además es muy fácil acceder para cometer actos fraudulentos y, existe una alta probabilidad de impunidad, resulta ser perfecto para cocinarse la corrupción. (Maestre, 2017).

En relación con lo antes señalado, se encuentra también una precisión de (Cárdenas, 2006), quien mencionó en su libro *“La corrupción en la contratación estatal colombiana una aproximación desde el neoinstitucionalismo”*, que según Transparencia Colombia, en muchas ocasiones se presentan pliegos de condiciones diseñados a la medida de determinado proponente, lo que permite identificar en los procesos licitatorios, el beneficio de dicho provecho personal.

Al respecto, encontramos que en diversas ocasiones, la persona beneficiada por estos contratos, ofrece un soborno que puede llegar a persuadir a quienes se encuentran a cargo del proceso; asimismo, en lo que concierne a la modalidad de licitación pública, en muchas circunstancias sobresalen los intereses particulares en los cuales incluso se llegan a generar contratos que niquiera se adaptan a las necesidades que se deben satisfacer. Según encuestas realizadas por Confecámaras, se estima que aproximadamente el 46% de los empresarios afirman que se debe realizar un pago para “asegurar” el proceso de licitación.

3. En cuanto a la tercera causa de dichas vulneraciones, el Dr. Edgar Enrique Martínez Cárdenas y el Dr. Juan Manuel Ramírez Mora en su libro *“La corrupción en la contratación estatal colombiana – una aproximación desde el neoinstitucionalismo”*, se pronunciaron al respecto manifestando que estas, se deben concretamente a la baja probabilidad de que la administración y específicamente quienes ejecutan estos procesos, sean descubiertos y por ende sancionados ágilmente.

Tanto en Colombia como en España, se ha tomado la contratación pública como escenario para la realización de fraudes y actos de corrupción, dados los altos rendimientos económicos que ofrece, esto se evidencia en los índices de percepción de los últimos años, de acuerdo con lo manifestado por Transparencia Internacional, así como los niveles de impunidad que se manejan en ambos países. Pese a los esfuerzos legislativos de las autoridades en las naciones, la norma castigadora aún no logra cumplir su fin preventivo, ni persuasivo, sino todo lo contrario, pues ocasiona un daño grave a la sociedad y enriquece a un grupo selecto de personas. (Scheller,2017).

En este punto, es apropiado igualmente recordar que (Robledo, 2016) en su libro *“La corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia”*, menciona varias de las situaciones de corrupción que se viven en nuestro país, entre las cuales nos interesa específicamente, la carencia de las medidas que deberían haber sido adoptadas como consecuencia de las licitaciones públicas en las que únicamente se presenta un oferente.

Igualmente, mediante documento del CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) titulado “*Una política de estado para la eficiencia y la transparencia en la contratación pública*” (2002), se establece la innegable consecuencia que ha traído para el país, la corrupción en los asuntos de contratación, pues ello, ha generado elevados sobre-costos en los bienes y servicios que proporciona el Estado y errores en cuanto a la idoneidad y calidad, lo cual desemboca en un aumento del gasto público; sin embargo, esto no ha sido objeto de investigación.

Asimismo, El Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, se pronunció al respecto y estipuló mediante acción contractual-recurso de reposición con radicado número: 85001-23-31-003-1998-00070-01 (18836) con fecha del 22 de junio de 2011, que el problema radica igualmente en la confianza que deposita el Estado en las diferentes Entidades públicas para ejecutar todo el procedimiento del contrato; lo que quiere decir que éstas, son quienes hacen de juez, parte y además supervisoras para el seguimiento y control del proceso, lo cual llega a ser una más de las razones para que se cometan actos ilícitos como consecuencia de tantas facultades incoherentes.

Propuestas de solución frente a la posible vulneración del principio de transparencia en los contratos estatales por entidades del orden nacional.

Ahora bien, como el objetivo se enfoca en buscar que “la administración esté conformada por personas aptas desde los puntos de vista de capacitación profesional e idoneidad moral, para que la función que cumplan sea acorde con las finalidades del interés general (Rodríguez, 2010), a continuación, se establecerán las propuestas de solución más adecuadas a la problemática que nos atañe.

Teniendo en cuenta que las dos causas principales de las trasgresiones al principio de transparencia en los contratos estatales se deben a la prevalencia de intereses particulares y al ofrecimiento de sobornos por parte de los oferentes para asegurar su triunfo, la propuesta de solución primordial se enfoca en hacer uso de los tratados internacionales que prohíben la corrupción, de tal forma, que sea sancionado el pago de sobornos, y las demás situaciones que constituyen una vulneración al principio de transparencia. (Cárdenas, 2006).

De esta manera, se busca tomar distancia de los ejercicios obsoletos de la función pública: comunicación cerrada, decisiones fragmentarias, inobservancia de la ley, e irresponsabilidad en los desempeños (Moreno,2012).

Es preciso mencionar que al ser Colombia uno de los países miembros de la Convención de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), tuvo que realizar varias modificaciones para adaptar su legislación, a los estándares de dicha organización, especialmente, en lo que respecta a su sistema judicial y la lucha contra el soborno, por tanto, para seguir siendo parte, es fundamental mantener las reformas, y garantizar bienestar económico, político y social.

En consonancia con lo antedicho, el Dr. Gabriel Alejandro Ramírez Rosales, en su artículo *"La corrupción: una práctica desleal y una amenaza para el crecimiento y desarrollo económico de los países y las PYMES"*, establece que:

El alcance de los instrumentos internacionales, busca promover y fortalecer en cada uno de los Estados Parte, el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; así como promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. (Medidas Internacionales para combatir la corrupción y delitos asociados [Parte 4/5], 2020).

Ahora bien, en cuanto a la segunda causa de las vulneraciones, se encuentra la baja probabilidad de que los funcionarios que hacen parte de la administración, y realizan estos procedimientos de selección, sean descubiertos y posteriormente sancionados; por tanto, sería viable aumentar la posibilidad de imponer castigos en materia penal, elevar las penas por corrupción y suspender a las personas que se hallen responsables por los daños ocasionados a los demás competidores y al Estado; estas sanciones, en cumplimiento con la ley 599 de 2000 por la cual se expide el Código Penal y la Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

Las personas que ejercen actos de corrupción, están incentivadas por el lucro que obtienen; por tanto, es este el que debe ser atacado con las penas. Es decir, la propuesta consiste en imponer sanciones económicas significativamente mayores a los beneficios que el funcionario o contratista obtuvo u obtendría con la comisión de la conducta (junto con las respectivas inhabilidades) cuando se cometa la infracción, de modo que impidan: 1) que el agente continúe infringiendo la ley y atentando contra la administración pública y, 2) ocasionar un impacto negativo de la conducta en el pensamiento (y por supuesto en el patrimonio económico) del infractor, de modo que sea persuadido a no reincidir. En el caso de que no cumpla con las sanciones económicas impuestas, o que reincida en las conductas punibles, se impondrían penas privativas de la libertad proporcionales. De esta manera, tal vez se lograría eficacia, proporcionalidad, intervención estatal y recuperación del fisco. (Scheller,2017).

Finalmente, para la tercera causa, se encuentra conveniente brindar incentivos para los proyectos en los que se demuestre la transparencia en todas las etapas del proceso, y para quienes brinden información verídica acerca de casos de corrupción en contratos estatales, de los cuales supervisen la ejecución de los mismos, en virtud a la relación de compromiso, lealtad, y buena fe, así no sea propiamente una persona vinculada con la administración; igualmente, resultaría factible marcar un cambio cultural en el cual se elimine por completo el ejercicio desfasado de la gestión pública (Moreno, 2012) para que de esta manera, se coopere a impulsar la vigilancia de todos los contratos realizados por la administración.

Es ideal también reforzar la función preventiva de los órganos de control en la contratación estatal. Por lo tanto, es de vital importancia que tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría General, fortalezcan su control preventivo, con el fin de alertar a los funcionarios, y evitar graves perjuicios por acciones u omisiones de las entidades públicas en la gestión contractual. Así mismo, resulta esencial que la Fiscalía avance oportunamente en la investigación y recopilación de pruebas. (Transparencia por Colombia, 2020).

Por último, es fundamental establecer un marco regulatorio mediante el cual el Consejo Nacional de Contratación (CNC), realice el seguimiento respectivo de la gestión pública en atención a los procesos de selección; por lo tanto, resultaría indispensable, incorporar de manera explícita un régimen especial mediante el cual se abarcaran específicamente los ítems

contractuales de interés público, como lo es la escogencia del contratista, y de esta manera, evitar la escogencia autoritaria y fomentar la elección de la oferta más conveniente para el país y NO para la administración.

Dicho Consejo sería creado por la “Ley General de Contratación para la Administración Pública” y ajustaría su actuación de acuerdo con lo reglamentado por ésta. (Departamento Nacional de Planeación, 2002).

4. Conclusiones

- La contratación estatal hace referencia al conjunto de reglas que se encargan de regular lo concerniente a los procedimientos que se llevan a cabo, para que las entidades ejecuten sus procesos de provisión de necesidades, (Contreras, 2016) como lo son los bienes y servicios requeridos para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos.

Además, se relaciona “... específicamente con el mandato constitucional, que se define como un estado social de derecho, en el cual, prevalece el bien común sobre el particular y se establecen los principios y los fines generales de la construcción y el funcionamiento estatal” (Nova, 2018).

- Todas las personas que tengan capacidad legal para la celebración de negocios jurídicos, tienen la posibilidad de realizar contratos con el Estado, es decir, quienes se puedan obligar por sí mismas (sin ningún tipo de autorización), las personas jurídicas, los consorcios e uniones temporales y las sociedades o asociaciones futuras. (Régimen Contractual en Colombia, s.f). Lo anterior, teniendo en cuenta que los particulares deben contar con igualdad de oportunidades para participar en la consecución de los fines del estado, siempre y cuando den cumplimiento a los requisitos estipulados para cada gestión que se vaya a ejecutar en dichos contratos.
- La transparencia se entiende como la garantía de rendición de cuentas, toda vez que permite que las actuaciones de los administradores sean puestas a disposición del público en general. (Florez, s.f).
- Las vulneraciones de las que se hace acreedora la administración cuando omite aplicar el principio de transparencia en sus actuaciones, se dirigen concretamente a la objetividad, neutralidad e igualdad de oportunidades para todos los participantes.

- Pese a que toda la normatividad existente enunciada a lo largo del presente escrito, establece las normas y principios que regulan el asunto de la contratación pública a nivel nacional, y están enfocadas única y exclusivamente en la satisfacción de las necesidades de la sociedad, en lo que se refiere a empleabilidad, desarrollo socio-económico, garantía de participación de los ciudadanos y eficiencia en el uso de los recursos públicos; se ha evidenciado la enorme corrupción en los contratos, por diversas situaciones como la absurda eliminación de ciertos proponentes por una supuesta carencia en los requisitos exigidos.
- Indiscutiblemente, la dirección y supervisión para el debido desarrollo del objeto contractual, ha quedado en el área de reserva de las Entidades del Orden Nacional, y lastimosamente no existe realmente una normatividad contundente que exija la verificación del éxito de los procesos realizados para la celebración de cada contrato.
- Indudablemente como consecuencia de todo este uso inadecuado de las facultades atribuidas, la administración ha perdido su credibilidad y ha generado desconfianza en el país, pues la ineficiencia en la utilización de los recursos públicos y la abusiva gestión estatal ha creado esa percepción a nivel nacional.
- La corrupción en los procesos de contratación pública provoca elevados costos que ocasionan graves secuelas que afectan la economía, debido a la falta de calidad y baja productividad. (Cuervo, 2014).

Así las cosas, se considera que la adecuada aplicación del principio de transparencia en los procesos de contratación estatal tendría un impacto positivo en el orden económico y político de la sociedad. (Lareo, 2018).

- Con las precitadas manifestaciones, se amplía más el panorama de que la corrupción, es un fenómeno que interesa a una generalidad, que de alguna u otra forma, observa el engaño que afecta a gran parte de la sociedad, la legitimidad del Estado y la ética que debe asumir la administración.
- Si bien es cierto que excepcionalmente se ha escogido al oferente más idóneo, también es verídico que en la mayoría de casos se han ajustado las condiciones de manera arbitraria, ilícita y deficiente, obstruyendo la transparencia de la que debe estar investida el sistema.

- En innumerables ocasiones, se ha demostrado el ajuste realizado a los pliegos de condiciones por parte de las Entidades del orden nacional, para lograr seleccionar al proponente que ellos prefieren.
- Las causas más comunes de la transgresión a la integridad de la que debe estar investida la administración en estos procesos de escogencia, son los sobornos de determinados proponentes, y la baja probabilidad de que los facultados para llevar a cabo estos procesos, sean sorprendidos en su deshonesta actuación.
- La administración no cuenta con la discrecionalidad requerida para contratar, pues debido a la naturaleza del interés que se pretende satisfacer, en la mayoría de los casos, acude a la adjudicación directa. (López, 2017).
- En vista de la inaplicabilidad del principio del cual se hizo referencia en esta investigación, y después de determinar la enorme responsabilidad de las entidades del orden nacional, se encuentra una latente necesidad de proponer e incorporar medidas que de alguna manera logren promover el respeto por los principios éticos que se dirigen a la prevalencia del interés general sobre el particular, para ello, es clave hacer uso de diferentes herramientas como la acción popular, con el objeto de alcanzar el derecho colectivo a la moralidad de la administración (Millán, 2018), lo anterior, en concordancia con el artículo 88 de la Constitución Política, que estipula lo siguiente: “La ley regulará las acciones populares para la protección de los **derechos e intereses colectivos**, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, **la moral administrativa**, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares” (...)
- Es indispensable implementar “castigos” como la suspensión de contratos, la inhabilidad de los cargos por un tiempo mayor al que determina la ley, y la imposición de penas más severas para quienes se hallen responsables de estos hechos de corrupción.
- Finalmente resulta primordial igualmente la cooperación de ciudadanos y de instituciones que se pongan en la labor de realizar seguimiento y control, y hagan uso de las medidas que podrían instaurarse, pues solo de esta manera, será posible que la

administración de las diversas Entidades encargadas de llevar a cabo los procedimientos, dejen de buscar mayor utilidad económica tras los numerosos sobornos que ofrecen quienes quieren “asegurar” su victoria, y empiecen a pensar en las consecuencias legales que ello podría suscitar, así probablemente, preferirán abstenerse de ejecutar dichas conductas.

Referencias.

- Araujo, Elbert Jose Brito. «Fraccionamiento de los contratos estatales ¿hechos atípicos?» 2017.
<https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10764/2018Britoelbert.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (último acceso: 03 de 06 de 2021).
- Bautista M. P. (2017). *El principio de transparencia como lucha contra la corrupción en la contratación estatal colombiana*. Obtenido de Repositorio Universidad Católica de Colombia: <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/14358>
- Cárdenas, E. E. (2006). *La corrupción en la contratación estatal colombiana una aproximación desde el neoinstitucionalismo*. Obtenido de Google Academico: <https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/622/598>
- Colombia Compra Eficiente* . (s.f.). Obtenido de Etapa precontractual: Principios de la contratación estatal: <https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatalcort%C3%A9s>
- Cortés, J. S. (2018). *El fenómeno de la corrupción en los procesos de licitación pública en contratación estatal en Colombia*. Obtenido de <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/15976>
- Cuervo, A. S. (2014). *Corrupción en la contratación pública en Colombia* . Obtenido de <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12906/CORRUPCI%C3%93N%20EN%20LA%20CONTRATACI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA%20EN>

[%20COLOMBIA.%20Aldemar%20Serrano.%20Oct.%208..pdf?sequence=1&isAllowed=y](#)

Departamento Nacional de Planeación. «Una política de estado para la eficiencia y la transparencia en la contratación pública.» *Consejo Nacional de Política Económica y Social* . 31 de julio de 2002. <https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3186.pdf> (último acceso: marzo de 24 de 2021).

Dworkin, Ronald. «¿Es el Derecho un sistema de reglas?» En *Los derechos en serio*. Ariel Derecho, 1977.

Contreras, J. S. (14 de 07 de 2016). *¿Qué es la contratación estatal?* Obtenido de <https://www.poli.edu.co/noticias/que-es-contratacion-estatal>

Florez, Margareth. «Una mirada a la transparencia en la gestión pública.» *Transparencia por Colombia* . s.f. <https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/enconfianza/articulosytemas/documentos/Una%20mirada%20a%20la%20transparencia%20en%20la%20gestion%20publica.pdf> (último acceso: 23 de Mayo de 2021).

Herrera, D. M. (2014). *El principio de transparencia en la contratación estatal*. Obtenido de Google Académico: <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12282/PRINCIPIO%20DE%20TRANSPARENCIA%20EN%20LA%20CONTRATACION%20ESTATAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Jara, Martha Lucía Bahamón. «Elementos y presupuestos de la contratación estatal .» *Repositorio Universidad Católica de Colombia* . 2018. <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/23523/1/elementos-y-presupuestos-de-la-contratacion-estatal.pdf> (último acceso: 23 de Marzo de 2021).

Jimenez, E. P. (2016). *Importancia de los principios de la contratación estatal*. Obtenido de Repositorio Universidad Militar: <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14822/castroJimenezErikaPatricia2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Lareo, R. M. (2018). *Características del principio de transparencia en la contratación estatal en Colombia*. Obtenido de <https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1193>

López, J. G. (2017). *El principio de selección objetiva en la licitación pública: Análisis desde la etapa precontractual*. Obtenido de <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/verbaiuris/article/view/1020/790>

Maestre, S. V. (2017). *Corrupción en los procesos de contratación pública: Derecho Penal Colombiano y Español*. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/235121171.pdf>

Medidas Internacionales para combatir la corrupción y delitos asociados [Parte 4/5]. (2020). Obtenido de LISA Institute: <https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/medidas-internacionales-corrupcion-delitos>

Millán, Leidy Castro. «Uniminuto.» 2018. <http://umd.uniminuto.edu/documents/992038/14619835/Boleti%CC%81n18.pdf/7518af17-6f88-444c-804b-eb55952d0589?version=1.0> (último acceso: 2021).

Moreno, Ana Beatriz Balcázar. «La supervision de los contratos estatales en las entidades autonomas del nivel nacional de la administracion publica.» 2012. <https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3820/BalcazarMoreno-Ana-2012.pdf?sequence=1> (último acceso: 2021).

Nova, L. A. (2018). *La liquidación de contrato estatal de prestación de servicios en Colombia y el análisis del precedente jurisprudencial*. Obtenido de <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15459/TRABAJO%20FIN>

AL%20MAESTRIA%20DERECHO%20ADMINISTRATIVO%2017-10
2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Régimen Contractual en Colombia. (s.f.). Obtenido de
<https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/DocEstrategicos/ABCCContratacion.pdf>

Robledo, J. E. (2016). La corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia. Obtenido de Google Académico :
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=2yeTDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=corrupci%C3%B3n+en+colombia&ots=3FXTh5OQA5&sig=Kn6Y09dOcUnmcY82pbxU2Bln9dE#v=onepage&q=corrupci%C3%B3n%20en%20colombia&f=false>

Rodríguez, E.G. (2010). Situación del régimen de carrera administrativa en Colombia. Obtenido de
<https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/article/view/2451/2134>.

Scheller D'Angelo, A. & Silva, Sh. (2017). *La corrupción en la contratación pública: operatividad, tipificación, percepción, costos y beneficios*. Obtenido de Revista Via Iuris: (Nº 23). file:///C:/Users/mvargas/Downloads/Dialnet-LaCorrupcionEnLaContratacionPublica-6773362.pdf

Tacuri, V. H. (s.f.). *El fraccionamiento indebido en las contrataciones del Estado*. Obtenido de https://www.usmp.edu.pe/derecho/itaest2011/Articulos_estudiantiles/04-2010_El_fraccionamiento_indebido_en_las_contrataciones_del_Estado.pdf

Zak, Pablo. «El principio de transparencia en la administración pública.» s.f. <http://www.zak-icg.com/admin/material/archdestacado2.pdf> (último acceso: marzo de 2021).

Normatividad

Constitución Política de Colombia (1991).

Decreto No. 1082 de 2015. (Mayo 26). “Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional” Obtenido de: <https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx>.

Ley 80 de 1993. (Octubre 28). Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. (Diario Oficial No. 41.094).

Ley 1150 de 2007. (Julio 16). Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley [80](#) de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. (Diario Oficial No. 46.691).

Ley 1474 de 2011. (Julio 12). Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. (Diario Oficial No. 48.128).

Ley 1712 de 2014. (Marzo 6). Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. (Diario Oficial No. 49.084).

Ley 1882 de 2018. (Enero 15). Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. (Diario Oficial No. 50.477).

Jurisprudencia

Acción contractual - recurso de reposición. 85001-23-31-003-1998-00070-01 (18836) (Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo , 22 de junio de 2011). Recuperado de [http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/94/S3/85001-23-31-003-1998-00070-01\(18836\).pdf](http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/94/S3/85001-23-31-003-1998-00070-01(18836).pdf)

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. Sentencia C-508/02 (Corte Constitucional, 2002). Obtenido de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-508-02.htm>.